

# La Vaca y la política

Herve Kempf



El gobierno francés decidió el 8 de diciembre no levantar el embargo a la importación de carne de res británica. De este modo, se ha discretamente evadido del campo donde la ciencia tiende a encerrar a la política desde hace algunos años. Apoyándose sobre la contradicción de opiniones entre los comités de expertos europeos y franceses, él se ha de hecho situado sobre el terreno político, argumentando el principio de precaución, para acogerse a la corriente dominante en la opinión pública. Así ha resuelto la contradicción entre la legitimidad de la ciencia en tanto que suministradora de la verdad y de la razón, y la incapacidad práctica en que ella se encuentra a menudo de decidir problemas oscuros. Este acto, testimonia el retorno de la razón política frente a la razón científica. Recuerda que la política es una determinante legítima en esas cuestiones técnico-científicas que “prolifera”, según la expresión de Bruno Latour, en la sociedad industrial: organismos genéticamente modificados, cambio climático, contaminación atmosférica, reses con hormonas, están tanto como la vaca loca, en el corazón de controversias científicas indecibles que requieren si no la espada de Alejandro zanjando el nudo gordiano, al menos decisiones claras. Este retorno de la política ha sido posible por la crisis de legitimidad de la posición científica, que resulta de razones coyunturales tanto como teóricas. Elevada por sus éxitos en las técnicas que mejoran la vida cotidiana y en el conocimiento de los misterios del mundo material, la ciencia no ha cesado desde el siglo XIX de ganar influencia en los procesos de decisión política. Sea al imponer sus soluciones a la política (lo nuclear es racional), sea al revelarse indispensable para tratar de ordenar los embrollos creados por la puesta en marcha de sus producciones —¿a quién otro que a su conceptor pedir la reparación de una máquina de la cual uno no comprende los planes?—, la comunidad científica ganaba todos los golpes. Y desde entonces los comités de expertos no han dejado de multiplicarse como hongos después de la lluvia, para aclarar a los tomadores de decisiones, pero también, como medio de empujar decisiones en instituciones percibidas, con razón o sin ella, como poco democráticas.

En el cuadro de la Unión Europea, las decisiones de los comités de expertos tienden así a imponerse a los Estados miembros, en el caso de la vaca loca o en el de los organismos genéticamente modificados (OGM) y, del mismo modo, en la Organización Mundial del Comercio, colocándose en el corazón de su procedimiento de resolución de los diferendos entre países con sus *pruebas científicas*. La tendencia de los sistemas políticos a cubrirse reportando sus decisiones sobre comités de expertos se ha acelerado aún cuando la validez de esos comités se halla cada vez menos asegurada. La primera razón, trivial pero ciertamente no despreciable, de esta puesta en cuestión es el hecho de que de modo creciente los expertos están en *conflicto de intereses*, es decir, que ellos se encuentran, por contratos de investigación con empresas privadas o por posiciones en éstas, como jueces y partes a la vez. Es difícil por ejemplo ser objetivo en relación a los OGM cuando uno está involucrado con las empresas que los fabrican. Esta situación no es sólo imputable a una deriva moral de los científicos, sino también a la presión que estos sufren para ejercer su investigación en o con la iniciativa privada. Así, del mismo modo que los ministros pueden ver influir su posición en relación a lo nuclear por los honorarios que ellos reciben de los industriales, los investigadores pueden estar influidos por vínculos de la misma naturaleza. Una segunda razón deriva de la naturaleza misma de la ciencia, por lo que ella es, o por la idea que se hace de ella: mientras que el modelo epistemológico dominante en el siglo XX describía una ciencia noble abriendo el camino a la humanidad —podando el bosque oscuro de los secretos del universo—, la actividad científica se percibe hoy, bajo la influencia del epistemólogo Karl Popper, como una empresa de refutación permanente. No solamente nada es seguro, afirma esta concepción, sino que la actividad científica consiste en refutar las teorías establecidas: ellas pueden sobrevivir a la refutación, pero jamás estar establecidas definitivamente. Nada, entonces, más científico que la controversia, la indecibilidad, la incertidumbre. Es, en la epistemología dominante, la certeza la que no es científica. Finalmente, una tercera razón fragiliza la fuerza de las decisiones de los expertos:

es el reconocimiento cada vez más grande de que los debates que ellos tienen que celebrar no tienen un contenido solamente científico sino también social. ¿Quién creería que detrás de las vacas locas, el cambio climático, no hay más que una cuestión científica? La dimensión científica es por supuesto esencial a la comprensión de esos híbridos tecno-sociales. Pero el modo de producción, el lugar de los pequeños campesinos, la opción de los medios de transporte, la relación entre los países ricos y pobres, también son evidentemente parámetros poderosos en las decisiones a tomar. Dicho de otro modo: la cuestión que nos plantean la vaca loca y el planeta en calentamiento, no es: ¿en qué medida estamos en peligro?, sino: ¿en qué mundo quiere usted vivir? Esta cuestión es política. Y los científicos no saben ni deben responderla. No se trata de lanzar la sospecha sobre los científicos sino al contrario de reinserterlos en el debate social, liberándolos de la carga de enunciar la verdad, reconociendo, como lo propone Bruno Latour en *Politiques de la nature*, su talento especial para hacer hablar a los “no humanos”, es decir, todos esos híbridos entre la sociedad y la naturaleza. Tales son también las conclusiones del reporte de Philippe Karoulisky y Genevieve Viney sobre el principio de precaución, rendido recientemente al primer ministro, que tienden a reforzar los procedimientos y el estatuto de los expertos. Pero este camino, que conducirá paradójicamente a multiplicar las instancias de expertos, y por tanto las posiciones contradictorias, no tiene sentido más que si él opera en la reafirmación y el reconocimiento de los valores propiamente políticos. Esto supone que sean reconocidos los modelos de sociedad que están implícitos en las opciones tecno-científicas. Y que sea enunciado legítimamente el modelo al cual uno se refiere. Finalmente, debe ser claramente establecido que los procedimientos de expertos, si ellos son indispensables, no pueden imponerse sobre la libertad de decisión de instancias democráticamente elegidas.

Le monde, 20 diciembre 1999.